



Asamblea General

Distr.: general
17 de febrero de 2017

Español únicamente

Consejo de Derechos Humanos

34º período de sesiones

27 de febrero a 24 de marzo de 2017

Tema 3 de la agenda

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – México: comentarios del Estado

GE.17-02558 (S)



* 1 7 0 2 5 5 8 *

Se ruega reciclar



Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes acerca de su misión a México: comentarios del Estado*

1. Con relación al párrafo 11 del Informe de Seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, mediante el cual el Relator nota con preocupación que la Suprema Corte de Justicia haya determinado en abril de 2015 el carácter constitucional de la figura del arraigo para delitos graves relacionados con la delincuencia organizada, el Estado mexicano emite los siguientes comentarios:

- El 18 de junio de 2008, y ante la urgente necesidad de hacer frente al fenómeno del crimen organizado transnacional, se introdujo la figura del arraigo en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permite a la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo de una persona tratándose de delitos de delincuencia organizada;
- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN– al resolver el Amparo Directo en Revisión 1250/2012 en abril de 2015, analizó si el arraigo regulado en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales es constitucionalmente válido. El Pleno identificó que el precepto impugnado, efectivamente regula una restricción constitucional expresa al ejercicio de la libertad personal, en una segunda etapa verificó si el precepto impugnado es más restrictivo que la Constitución, y al obtener una respuesta negativa, en una tercera etapa, determinó que debe prevalecer esa restricción constitucional sobre la libertad personal;
- Cabe mencionar que el arraigo está cayendo en desuso, y actualmente no hay ninguna persona detenida bajo dicha figura.

2. Por otra parte, el Gobierno de México observa con preocupación que la información contenida en el apartado “Código de Justicia Militar” carece de fundamentos suficientes, por lo que podría interpretarse como parcial o imprecisa. Por ello, se formulan las siguientes precisiones:

3. México ha aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual ha fijado como ejes para limitar la jurisdicción militar, los siguientes:

- En un estado democrático de derecho, la Jurisdicción Penal Militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las Fuerzas Militares;
- Por ello, en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden military;
- Frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la Jurisdicción Militar;
- Cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto al imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en

* Reproducido según lo recibido.

situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal.

4. En su momento, la CoIDH consideró al art. 57, fracc. II, inciso a) del Código de Justicia Militar (CJM) como una disposición amplia e imprecisa, que impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado.

5. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver diversos conflictos competenciales y amparos en revisión, fijó los siguientes criterios para acotar la jurisdicción militar:

- Los delitos cometidos por personal militar contra civiles, serán juzgados por Tribunales Civiles;
- Las víctimas u ofendidos civiles pueden interponer el juicio de amparo, para impugnar la competencia del fuero de Guerra;
- El art. 57, fracc. II, inciso a) del CJM, es inconveniente e inconstitucional;
- La interpretación de los alcances del fuero de guerra, siempre será restrictiva;
- En la jurisdicción ordinaria, la competencia recae en los Tribunales Federales, cuando los hechos se cometan en servicio o con motivo de las funciones propias, por ser los militares servidores públicos de la federación;
- En los delitos en donde no existan víctimas, ofendidos o cómplices civiles, la competencia corresponde a la jurisdicción militar;
- Exclusivamente operará la jurisdicción militar, cuando se trate de delitos típicamente castrenses;
- Los delitos cometidos por militares que no afecten directamente la disciplina militar, pero sí la administración de justicia del orden federal, serán competencia de los tribunales civiles, aunque no existan civiles involucrados.

6. Los citados parámetros constituyeron los lineamientos para consolidar la reforma del art. 57 del CJM, del 13 de junio de 2014.

7. Se destaca que la jurisprudencia de la CoIDH señala la necesidad de que un Estado de derecho cuente con una jurisprudencia militar encaminada a la protección de intereses jurídicos, especiales, vinculados a funciones propias de las fuerzas armadas; y que la propia Corte no ha considerado necesario modificar el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Tomando en cuenta lo anterior, el gobierno de México se permite sugerir la conveniencia de eliminar los párrafos 13, 14, 15, 16 y 17 del informe.

9. Por lo que hace al Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP) éste prevé derechos a favor de las personas imputadas y de las víctimas en igualdad de circunstancias, reconociendo las mismas prerrogativas a favor de quienes intervienen en el proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma privilegia el trato de respeto y dignidad de las personas, establece que todas ellas deben contar con asesor jurídico, acceso a la justicia pronta, gratuita e imparcial, con todos los datos de prueba, protección cuando exista riesgo para su vida, así como medidas de protección precautorias y cautelares y medios de impugnación.

10. Por ello, no se coincide con la apreciación del Relator en el sentido de que tales reformas podrían socavar el bienestar de la población, tomando en cuenta lo siguiente:

11. El fuero militar constituye una jurisdicción especializada, que juzga a elementos militares cuya actuación haya violentado la disciplina militar, bien jurídico que permite el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la protección de la sociedad.

12. El CMPP tiene su base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación reguladora de los juicios orales en el orden jurídico nacional. Por ello, el CMPP recoge los procedimientos y herramientas de investigación que se aplican en el nuevo sistema acusatorio, respecto de hechos de la competencia de la jurisdicción militar y contra el personal castrense, excluyéndose figuras jurídicas que resultan inaplicables, por su propia y especial naturaleza.

13. En ese sentido, se estima que limitar las atribuciones de los órganos de procuración y administración de justicia militar afectaría seriamente la jurisdicción castrense; lo anterior, en virtud de que derivar los juicios a tribunales civiles implicaría que los tribunales militares no actuaran con plenitud de jurisdicción -sobre su propio personal- principio que todo órgano que imparta justicia debe poseer para garantizar una genuina justicia.

14. Por lo argumentos señalados y como se mencionó arriba, se estima innecesario incluir los párrafos 13, 14, 15, 16 y 17 del informe en cuestión.

15. Con respecto al párrafo 21, en el cual el Relator señala “que aún queda mucho más por hacer para prevenir, investigar y sancionar de forma real y efectiva este tipo de delitos por parte de las fuerzas militares y las policías a efecto de que la tortura en México deje de ser una práctica generalizada”, cabe precisar lo siguiente:

- El personal militar involucrado en los hechos que mostraba a militares y policías asfixiando a una mujer con una bolsa de plástico consiste en un Jefe, un Oficial y una Tropa, quienes han sido procesados por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia, así como una Tropa por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la administración de justicia en su modalidad de falsedad en declaraciones ante una autoridad distinta a la judicial. Dichos elementos actualmente están internos en la prisión militar.

16. En el siguiente párrafo, el Relator refiere que recibe con desasosiego la información sobre el Caso Tlatlaya en donde se registró la muerte de 22 civiles en junio de 2014, por lo que se informa lo siguiente:

- Sobre los hechos ocurridos en junio de 2014, en el caso Tlatlaya, se informa que el 21 de octubre de 2014, la CNDH emitió la recomendación 51/2014, la cual fue aceptada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito resolvió la apelación de la formal prisión de un Juez Federal, donde determinó que sólo existió un evento de disparos de armas de fuego por lo que no se acreditaron elementos suficientes para someter a proceso a personal militar. Esta circunstancia de ninguna manera implica impunidad, ya que a dicho personal no se le está sustrayendo de la acción jurisdiccional, sino que dentro del proceso para determinar su responsabilidad penal, se acordó que no existen elementos de convicción suficientes para que se restrinja su libertad y se le someta a juicio. En ese sentido, el Ministerio Público Federal es libre de recabar nuevos elementos probatorios, que acrediten en su caso, la probable responsabilidad penal en los hechos;
- Al respecto, debe considerarse que la jurisdicción militar únicamente tiene competencia para conocer delitos contra la disciplina militar, en virtud de la reforma (13 de junio del 2014) al artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar;
- En ese sentido, el Ministerio Público Militar actuó conforme a la ley al investigar conductas tipificadas como delitos por el Código de Justicia Militar, sin que en ningún momento haya conocido lo relacionado con la queja por las presuntas

violaciones a los derechos humanos en contra de las personas civiles, con base en la legislación nacional acorde a los criterios internacionales de protección a los derechos humanos.

17. En el apartado “Presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad”, párrafo 33, el Relator señala “que ha recibido información preocupante sobre el aumento de la militarización en el Estado de Nuevo León y que en Veracruz y Baja California las fuerzas militares continúan realizando labores de control de seguridad”. Sobre el particular:

- Cabe señalar que el dato de los 51,000 elementos desplegados en el territorio nacional, abarca todo tipo de operaciones y actividades que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: a) Operaciones para reducir la violencia; b) Operaciones de erradicación de enervantes; c) Apoyo a la Seguridad Pública; d) Seguridad a instalaciones vitales; y e) Servicios locales (operaciones locales, fuerzas de reacción y patrullamientos);
- Con relación a los 37,000 elementos desplegados en diferentes mandos territoriales, se contabiliza únicamente los empeñados en Operaciones para Reducir la Violencia, Erradicación de enervantes, Apoyo a la Seguridad Pública y Seguridad a Instalaciones Estratégicas, excluyendo los servicios locales responsabilidad de cada Mando Territorial;
- Respecto al apoyo que se proporciona a las autoridades civiles específicamente en tareas de seguridad pública, la Secretaría de la Defensa Nacional únicamente proporciona este tipo de apoyo a las entidades federativas con las cuales ha celebrado previamente un Convenio de Colaboración en tanto la entidad interesada profesionaliza y adiestra a sus cuerpos de policía. En el año 2014 la SEDENA tenía celebrados convenios con 4 estados (Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Durango) proporcionando en apoyo un total de 3,978 elementos para esta actividad. Actualmente se proporciona apoyo a la seguridad pública únicamente en 3 entidades (Nuevo León, Michoacán y Durango) con un efectivo total de 1,824 elementos, 2,154 efectivos menos que el año 2014.

18. En el apartado de “Investigaciones”, el Relator cita las cifras de denuncias que recibe la CNDH para argumentar que “México afronta una situación de inseguridad e impunidad. La lucha contra la delincuencia organizada ha incrementado la comisión de torturas y malos tratos.” Al respecto, cabe precisar lo siguiente:

- Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por presuntos actos de tortura y malos tratos, no demuestran de forma real y objetiva que se haya incrementado la comisión de estas conductas, en virtud que estas contienen únicamente los argumentos de los presuntos agraviados, sin embargo, al ser presentadas las quejas, se inicia el procedimiento para el desahogo del expediente respectivo, y con base en los elementos probatorios se determina la veracidad de la denuncia y la consiguiente responsabilidad de los servidores públicos involucrados;
- La gran mayoría de las quejas presentadas ante el citado Organismo Nacional, son concluidas sin responsabilidad para la Secretaría de Defensa, circunstancia que no se ve reflejada en el informe del Relator.

19. En el párrafo 35 señala que “un ejemplo claro de la impunidad en delitos de tortura en México ha sido la actuación del Estado al respecto de la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en octubre de 2015”. En ese sentido, el Estado mexicano informa sobre las acciones que ha puesto en marcha para dar cumplimiento a la decisión del Comité contra la Tortura:

- De conformidad con la resolución del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, el Estado tenía la obligación de determinar la inmediata puesta en libertad de las víctimas del caso al que se hace referencia. Dicha recomendación se cumplió el 25 de noviembre de 2015 al haberse dictado la sentencia definitiva dentro de la causa penal 27/2015-III, en la cual, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, determinó absolver a los imputados al estimar que las pruebas para acreditar las conductas delictivas atribuidas, fueron obtenidas mediante actos de tortura;
- Los peticionarios fueron absueltos dentro del proceso penal en el que se acreditó la comisión de actos de tortura. Sin embargo, su absolución en dicho proceso penal no los exime de ser sujetos a otros procesos por distintos hechos ilícitos que lesionan el interés nacional de conformidad con las leyes mexicanas;
- De igual forma, el 22 de octubre de 2015, la SEDENA remitió a la CEAV una copia de la recomendación 33/2015, señalando el nombre de las víctimas, en donde actualmente se están realizando los trámites necesarios, a fin de analizar la vía por la cual será posible otorgar a las víctimas una reparación adecuada;
- Desde el 22 de octubre de 2015, la SEDENA coadyuva en la investigación de los hechos que lleva a cabo la PGR, proporcionándole además la información que requiere, e informando oportunamente sobre ello a la CNDH;
- El 29 de octubre de 2015, la Sección Tercera (Operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional ratificó a los mandos territoriales y dependencias el ordenamiento relativo a la observancia en actos del servicio de la “Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las instituciones civiles”, en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y el “Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2014, en cuyo numeral 18, inciso “e”, se contempla el empleo de manera intensiva de cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio, para documentar los incidentes e interacciones con la población civil;
- Finalmente, la Dirección General de Derechos Humanos de la SEDENA elaboró un programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, dirigido a los servidores públicos integrantes de la 2° Zona Militar (Tijuana, B.C.). Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación 33/2015.

20. Posteriormente refiere que “El Estado todavía no ha reparado a las víctimas de estos hechos. El Estado mexicano solamente inició la averiguación previa en la Procuraduría General de la República a partir de la denuncia que presentó la CNDH y no como consecuencia de la recomendación del Comité.” Cabe destacar que -de conformidad con la Ley General de Víctimas-, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reconoció dicha calidad a las personas a que alude dicho párrafo y les ha brindado atención médica especializada. Lo anterior, de manera previa a la emisión de pronunciamientos del CAT y de la CNDH, a través de un reconocimiento que realizó la SEDENA. Lo anterior fue retomado en medios informativos, por ejemplo en la siguiente liga electrónica <http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/llaman-defensores-de-jovenes-torturados-a-sedena-y-pgr-a-cumplir-recomendaciones-de-cndh-135>. La recomendación de la CNDH puede ser consultada en la liga electrónica http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2015/Rec_2015_033.pdf.

21. Por otra parte, en el párrafo 58, el Relator lamenta no haber recibido información suficiente al respecto de los avances con ocasión de la expedición de la Ley General de Víctimas, por lo que se proporciona información adicional al respecto:

- La Ley General de Víctimas se reformó el 3 de enero del presente año con la finalidad de agilizar la entrega de recursos a las personas víctimas. Tras un proceso plural de análisis y discusión que inició en el Senado de la República y concluyó con la aprobación en la Cámara de Diputados, el Estado mexicano cuenta ahora con un instrumento legal renovado dirigido a fortalecer las capacidades institucionales y rediseñar las políticas públicas destinadas a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas en situación de victim;
- Los aspectos principales de la reforma son: 1) la optimización en los procesos de acceso a medidas de ayuda; 2) el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que prestan atención directa a las víctimas; 3) el apoyo y la atención en aquellos casos en que las víctimas del fuero común no son atendidas; 4) el derecho de las víctimas para acceder a peritajes independientes; 5) el cambio en la estructura orgánica de la CEAV; 6) la especialización del personal que presta servicios en la institución; 7) por primera vez en la legislación mexicana, la protección especial a personas que han sido desplazadas a causa de un hecho victimizante; 8) la representación de las organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y académicos en la propia Comisión a través de una Asamblea Consultiva; y, 9) el fortalecimiento de la figura del asesor jurídico;
- La reforma ordena a la CEAV iniciar la adecuación del marco normativo y la modificación de su estructura orgánica y los procesos de atención para tener una institución más eficiente, operativa y humana que haga efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de que son titulares las personas en situación de víctima; a la par, habrán de construirse vías de trabajo y colaboración con las comisiones ejecutivas de las entidades federativas para concretar la vigencia de un Sistema Nacional que atienda de forma coordinada a las víctimas;
- La Ley General de Víctimas prevé la participación activa de los tres órdenes de gobierno, de la academia, de las Organizaciones de la Sociedad Civil y colectivos de víctimas; en ese marco, la CEAV publicará la convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva que establece la reforma que aprobó el Congreso de la Unión;
- En materia de tortura se agregó una fracción al artículo 7 (derechos de las víctimas) considerando la protección de las víctimas de tortura (entre otros delitos), así como de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos;
- Incluso antes de la reforma, la CEAV realizó importantes esfuerzos para reparar a las personas víctimas de tortura. A mayo de 2016, se habían emitido proyectos de reparación que consideraban a 83 personas víctimas de tortura;
- La CEAV cuenta con un Comité de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CTTCID), que elaboró el “Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la práctica de la tortura”, mismo que revela que una tercera parte de la sociedad mexicana se pronuncia a favor de su utilización ante determinadas circunstancias;
- Sobre las cifras de reparaciones, puede consultarse el boletín de prensa con motivo del “Taller sobre Aplicación del Protocolo de Estambul y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura” organizado por la CNDH en el cual tuvo participación la CEAV, en la liga electrónica http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_189.pdf;
- Finalmente, se informa que la CEAV, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), elaboró un "Estudio para la

Elaboración del Diagnóstico sobre la percepción de la población sobre la práctica de la tortura"; el cual permitió realizar la presentación del "Documento Ejecutivo sobre los Resultados del Diagnóstico Nacional de la percepción de la población sobre la práctica de la tortura", mismo que se puede consultar en la liga electrónica: <http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/03/Documento-Ejecutivo-Tortura10Marzo2016.pdf>. El boletín de prensa respectivo, se encuentra en: <http://www.ceav.gob.mx/2016/03/la-ceav-y-el-iiij-unam-presentan-los-resultados-del-diagnostico-nacional-de-la-percepcion-de-la-poblacion-sobre-la-practica-de-la-tortura/>. Asimismo, el diagnóstico fue comentado durante el foro "Por el derecho a la rehabilitación de personas sobrevivientes de tortura" organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consultable en la liga <http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2016/06/BOLE-1082016.pdf>.

22. En el párrafo 67 de su informe, la Relatoría manifiesta preocupación por la tesis aislada CCV/2016 publicada el 19 de agosto de 2016 por la Primera Sala de la SCJN, debido a que ésta "plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, en aquellos casos en los que no que exista confesión o "autoincriminación" de la persona acusada". Al respecto, se destaca lo siguiente:

- En la doctrina constitucional desarrollada con relación al tema de la tortura, y particularmente sobre las reglas de exclusión probatoria, la Primera Sala ha sido firme en sostener que si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, una prueba obtenida de forma irregular, ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal, debe ser considerada inválida; por ello, ninguna prueba que sea en contra del derecho debe ser admitida y, si pese a ello ya se había desahogado, debe restársele todo valor probatorio. Sobre esa premisa se estableció que tratándose del delito de tortura, en el supuesto de haberse determinado su existencia como violación al derecho humano de debido proceso, se debe excluir todo medio de convicción obtenido directamente de la misma o que derivara de ella. Lo que comprende declaraciones, confesiones y toda clase de información incriminatoria resultado de éstas;
- Al tenor de esos lineamientos, se aprecia que la reposición del procedimiento que en su caso se ordene con motivo de una denuncia de tortura, tiene por objeto que se verifique, a través de los medios de prueba correspondientes, si se acredita o no la respectiva violación de derechos fundamentales; y, de ser así, debe analizarse la forma en que impacta en el proceso penal, a fin de proceder a la exclusión de las declaraciones, confesiones y toda clase de información incriminatoria que resulten de la aludida violación;
- Lo considerado se sustenta sobre la base de que los efectos de la prueba ilícita no son ilimitados en el ámbito del proceso penal, la violación al derecho fundamental a no ser objeto de tortura, impacta única y exclusivamente sobre la confesión que en su caso hubiera rendido el inculpado y, en su caso, en las declaraciones o alguna otra clase de información autoincriminatoria. Por tanto, a ningún sentido práctico conduce ordenar la reposición del procedimiento para que se investigue la correspondiente denuncia de tortura, al no tener consecuencias procesales, precisamente, por no haber confesión que excluir y se advierta que no existen pruebas que deriven directamente de los actos de tortura aducidos.^{1:}
- La Primera Sala no se aparta de la doctrina que se ha desarrollado sobre el tópico de la tortura y su impacto en el proceso penal, en tanto que únicamente se modifica para agregar un nuevo requisito que establezca ante qué hipótesis se actualiza el deber de las autoridades jurisdiccionales de iniciar una investigación en el marco del proceso legal, para hacerse de elementos que permitan determinar la existencia de tortura en su vertiente de violación a derechos humanos, supuesto en el cual, deben

apegarse íntegramente a los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respect;

- No se soslaya que la doctrina de la Primera Sala alude a que además de la confesión, deben excluirse todas las declaraciones, datos o información obtenida con motivo de la tortura. Ello, bajo la idea de que la autoincriminación es tan solo uno de sus posibles resultados, no una condición necesaria de la misma, circunstancia que debe observarse por el órgano jurisdiccional en el caso concreto, pues de corroborarse uno de esos supuestos cobrará aplicación el criterio existente sobre los efectos expansivos de exclusión de pruebas;
- Además, siguiendo los lineamientos establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se entiende, por exclusión, que si dichas declaraciones, datos o información, no entran en el contexto de la confesión para los efectos del proceso penal, de llegar a corroborarse que se encuentran vinculadas con el mismo, entonces, podrían ser consideradas como pruebas ilícitas, pues podrían tratarse de las declaraciones de los testigos o coimputados, las cuales, como se estableció, pueden incidir en el resultado del proceso.

“[...] Por las consideraciones antes referidas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a la convicción de que por regla general, la violación al derecho fundamental a no ser objeto de tortura, únicamente impacta en el proceso penal cuando el inculcado ha emitido confesión de los hechos o existe alguna otra declaración o información autoincriminatoria; y, por tanto, cuando esta confesión no existe, y del examen de las circunstancias se llega a la convicción de que no existen otras pruebas que deriven directamente de la alegada tortura, a ningún sentido práctico conduce ordenar la reposición del procedimiento para que se investigue la denuncia de tortura; pues al no generar consecuencias procesales, por no haber confesión que excluir, ni conexión contra otras pruebas, con la reposición del procedimiento sólo se incidirá en perjuicio del derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia que se consagra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

- Es relevante destacar la obligación de investigar los hechos de la alegada tortura conforme a los estándares internacionales, a fin de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades y en su caso, esclarecerla como delito.

23. En el apartado “Condiciones de Detención”, el Relator saluda la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y hace mención a algunos aspectos de la Ley. Al respecto, se considera conveniente resaltar lo siguiente:

- El 16 de junio 2016, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal que establece conforme a su artículo 1, las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y además regular los medios para lograr la reinserción social; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en dicha ley;
- En términos de su artículo 2 las disposiciones contenidas en dicha ley “son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero

federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley.”;

- Además, prevé que para la aplicación de dicha Ley “deben atenderse también los estándares internacionales.” Cabe mencionar, que sus disposiciones se alinean a los principios internacionales orientadores contenidos en las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la ONU”; “El Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o de prisión”; “Los Principios básicos para el tratamiento de reclusos”; “Las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes”; así como a los instrumentos internacionales vinculatorios en la materia, como son “La Convención Americana sobre derechos humanos” y “El Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

24. En cuanto al apartado relativo a la sobrepoblación penitenciaria, cabe mencionar lo siguiente:

- El Sistema Penitenciario Federal actualmente incorpora 24 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), con una capacidad instalada de 35,958 espacios en operación, de los cuales 2,528 son para mujeres y 33,430 para hombres; por ello desde diciembre de 2015 se erradicó la sobrepoblación en los CEFERESOS;
- Todos los CEFERESOS se encuentran acreditados por la American Correctional Association (ACA), en cuanto al cumplimiento con los estándares internacionales para las mejores prácticas penitenciarias, entre ellos, que la población penitenciaria se encuentre en condiciones de habitabilidad dignas, es decir sin hacinamiento y con todos los servicios para un mínimo bienestar;
- El 18 de junio de 2016, entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito federal como local, que en su artículo 184 prevé soluciones alternas del procedimiento penal, tales como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, mientras que en el artículo 185, prevé al procedimiento abreviado, como una forma de terminación anticipada del proceso; instituciones jurídicas que incidirán para que se tenga un menor número de población penitenciaria.

25. En el apartado relativo a las condiciones de salud, higiene y alimentos, el Relator refiere que la CNDH destacó que el Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una política nacional que atienda las necesidades de los centros penitenciarios. Al respecto, cabe precisar lo siguiente:

- El 16 de junio 2016, se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal. La mayoría de las disposiciones de dicha ley que recoge el nuevo sistema penitenciario, entraron en vigor el día siguiente de su publicación, es decir, el 17 de junio de 2016, sin embargo, en el artículo Segundo Transitorio del Decreto respectivo se consideró un periodo de vacatio legis diferenciado para la implementación de diversas figuras de corte garantista, entre las cuales destacan aspectos relativos a la atención médica a personas privadas de su libertad, es así que su artículo 34, que entrará en vigor a más tardar el 30 de noviembre de 2018, establece:

“Artículo 34. Atención médica

La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud.

La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran.

Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran.

La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención.

Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución.

Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento.

Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad.

Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud.”

- Además, en dicho ordenamiento se establece la corresponsabilidad de diversas dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y sus equivalentes en las entidades federativas a las que se les confirieron responsabilidades directas o indirectas, para prever programas en materias de salud, trabajo, educación y deporte, para un fortalecimiento del sistema penitenciario en el ámbito nacional, es decir, todos actuando bajo las mismas directrices para un fin común;
- Por otra parte, el artículo 32 de la ley aludida, que también entrará en vigor a más tardar el 30 de noviembre de 2018, prevé un apartado relativo a “servicios”, dentro de los cuales en términos del diverso numeral 3, fracción XXV, quedan comprendidos, los medicamentos, alimentos y artículos de aseo personal, entre otros:

“Artículo 3. Glosario

Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por:

I a XIV...

XXV. Suministros: A todos aquellos bienes que deben ofrecer los Centros Penitenciarios, gratuitamente, entre ellos, el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, anticonceptivos ordinarios y de emergencia; ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y

útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación;

XXVI a XXVII...”

“Artículo 32. Servicios

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a prestar sus servicios a todas las personas privadas de la libertad que los requieran, ser de buena calidad y adecuarse a sus necesidades, bajo criterios de razonabilidad y no discriminación. Las personas sujetas a prisión preventiva y las personas aseguradas con fines de extradición gozarán de estos derechos desde su ingreso. Las personas privadas de la libertad podrán hacer uso voluntariamente de los servicios que ofrezca el Centro Penitenciario, con excepción de las medidas preventivas de enfermedades, de higiene y de salubridad general.

La Autoridad Penitenciaria está obligada a brindar gratuitamente todos los suministros a la población penitenciaria.”

- También destaca que en la XIV Sesión de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, realizada los días 28 y 29 de noviembre de 2016, se aprobaron 25 protocolos para que de manera obligatoria sean implementados tanto por las entidades federativas y la federación; entre los que se encuentran los relacionados con el otorgamiento de servicios de salud por prestador de servicios externo, y el de traslados por atención a urgencias médicas;
- En cuanto al personal de custodia, en el párrafo 73, el Relator señala que la CNDH reportó que existe autogobierno en las cárceles por la carencia de personal de custodia y que el personal encargado de custodiar los reclusos en los denominados CERESOS, es de 20 policías por cada 100 reclusos. Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé el tema de la custodia, en los artículos 19, 20 y 21, vigentes:

“Artículo 19. Custodia Penitenciaria

La Custodia Penitenciaria será una atribución de la Autoridad Penitenciaria consistente en:

I. Mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los Centros Penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables;

II. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los Centros Penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables; así como hacer cumplir su normatividad;

III. Dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones judiciales respecto a la pena privativa de libertad en los rubros de seguridad y custodia, ya sea en los Centros Penitenciarios, fuera de estos y de los recintos judiciales, en coordinación con las demás autoridades competentes, y

IV. Las demás que esta Ley u otros ordenamientos le confieran.

Artículo 20. Funciones de la Custodia Penitenciaria

La Custodia Penitenciaria tendrá las funciones siguientes:

I. Mantener reclusos y en custodia a las personas privadas de la libertad por disposición de la autoridad competente;

II. *Implementar las políticas, los programas y las estrategias establecidas en materia de seguridad y custodia penitenciaria, que para tal efecto diseñe la Autoridad Penitenciaria;*

III. *Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables;*

IV. *Mantener el orden y disciplina de las personas privadas de la libertad;*

V. *Preservar el orden y tranquilidad en el interior de los Centros, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad, visitas y personal de los mismos;*

VI. *Revisar a las personas, objetos o vehículos que pretendan ingresar o salir de los Centros, bajo los protocolos de actuación respectivos;*

VII. *Salvaguardar la integridad de las personas y bienes en los Centros, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz en los mismos, utilizando para ello los protocolos aplicables, con apoyo en las herramientas, mecanismos y equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones;*

VIII. *Efectuar revisiones periódicas en los Centros, con el objeto de prevenir la comisión de delitos con acatamiento de los protocolos y normatividad correspondientes, y*

IX. *Las demás que le confieran ésta y otras disposiciones.*

En la ejecución de las anteriores atribuciones, la Custodia Penitenciaria observará de manera irrestricta los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, visitas y personal del Centro.

Artículo 21. Intervención para el restablecimiento del orden

A solicitud de la autoridad competente, las instituciones encargadas de la seguridad pública podrán intervenir en el restablecimiento del orden al interior de los Centros en caso de emergencia y/o contingencia de conformidad con lo que se encuentre establecido en los Protocolos de intervención en casos de restablecimiento del orden, con el uso proporcional de la fuerza y con los protocolos de uso de las armas letales y no letales respectivamente."

26. Desde la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el 17 de junio de 2016, el Sistema Penitenciario Nacional se encuentra inmerso en la aplicación del Modelo Único de Implementación; los avances en cuanto a capacitación y desarrollo penitenciario son los siguientes: se capacitó a 6,740 personas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, respecto a la ley aludida y 226 formadores de entidades federativas.

27. También conviene destacar que en la XIV Sesión de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, realizada los días 28 y 29 de noviembre de 2016, se aprobaron 25 protocolos para que de manera obligatoria sean implementados tanto por las entidades federativas y la federación; se aprobaron el Protocolo relacionado con el manejo de motines; los criterios de pre liberación por libertad anticipada, así como el Acuerdo General para establecer espacios especiales de reclusión dentro de los establecimientos penitenciarios.

28. En cuanto a la situación específica de algunos Centros Penitenciarios que se menciona en el párrafo 77 del informe, cabe precisar lo siguiente:

- Se reitera que el 18 de junio de 2016, entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el territorio nacional, tanto a nivel federal como local. Este código prevé en su artículo 184 soluciones alternas al procedimiento penal, tales como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, mientras que en el artículo 185, prevé al procedimiento abreviado, como una forma de terminación anticipada del proceso; instituciones jurídicas que incidirán para un menor número de la población penitenciaria y por ende en el número de casos de violencia;
- Por otra parte, respecto a la necesidad de investigar los casos específicos de violencia señalados por el relator, cabe mencionar, que ante la posible comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, determinando el Código Nacional de Procedimientos Penales, los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial;
- Por lo cual, desde luego que resulta factible ante cualquier hecho delictivo se lleve a cabo la investigación atinente; o bien, que las personas interesadas, en ejercicio de sus derechos consagrados por nuestro orden jurídico, formulen la denuncia correspondiente ante la instancia competente para la investigación de los mismos.

29. En el párrafo 87, relativo al monitoreo de los centros de reclusión, se resalta que la Ley Nacional de Ejecución Penal le da facultades a las organizaciones de la sociedad civil para formular peticiones ante la Autoridad Penitenciaria contra hechos, actos u omisiones sobre las condiciones de detención. Al respecto, es preciso incluir la siguiente información:

30. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé en su artículo 58 lo siguiente:

“Artículo 58. Entrevistas y visitas de organismos públicos de protección de los derechos humanos

Las normas reglamentarias establecerán las provisiones para facilitar a los organismos públicos de protección a los derechos humanos, así como al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, el acceso irrestricto al Centro Penitenciario, archivos, y registros penitenciarios, sin necesidad de aviso previo así como asegurar que se facilite el ingreso a los servidores públicos de éstos y que puedan portar el equipo necesario para el desempeño de sus atribuciones y entrevistarse en privado con las personas privadas de la libertad.

Los defensores, en todo momento, podrán entrevistar a las personas privadas de la libertad en privado. No podrá limitárseles el ingreso de los objetos necesarios para el desempeño de su tarea, ni podrá revisarse el contenido de los documentos que introdujesen o retirasen de los Centros Penitenciarios.

Los Centros deberán contar con un área adecuada para que la persona privada de la libertad pueda entrevistarse en forma libre y privada con su defensor y a disponer del tiempo y medios razonables para su defensa.

Se deberá establecer las normas necesarias para facilitar el ingreso de las instituciones públicas que tengan como mandato vigilar, promover o garantizar los derechos de los grupos vulnerables o personas que por sus condiciones o características requieran cuidados especiales o estén en riesgo de sufrir algún tipo de discriminación, así como las condiciones en las que los representantes de organismos privados y civiles de protección y defensa de los derechos humanos podrán acceder a

entrevistar o documentar lo que consideren necesario, pudiendo mediar para ello una petición expresa de la persona privada de su libertad.

Queda prohibida toda reprimenda, acción de castigo o sanción que busque inhibir o limitar el derecho de la persona privada de su libertad para acudir ante las instituciones públicas y privadas de protección de los derechos humanos.

La obstrucción de la labor del personal judicial, de las personas visitadoras de los organismos públicos de protección de los derechos humanos, de las defensoras, del Ministerio Público y de las observadoras será sancionada administrativa y penalmente, en términos de la legislación aplicable.”

31. Aunado a ello, debe destacarse que cualquier persona que ingrese a un CEFERESO debe atender a las medidas de seguridad al interior y exterior de los mismos, ello de conformidad a lo dispuesto en el Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el cual en sus artículos 6 y 9 disponen claramente la obligación de toda persona de respetar y acatar las órdenes y señalamientos indicados por el personal de seguridad y la facultad del Director General del centro para negar el ingreso cuando se ponga en riesgo la seguridad del mismo, en los términos siguientes:

“Artículo 6.- Toda persona al interior y en el perímetro del Centro Federal, debe respetar y acatar las órdenes y señalamientos indicados por el personal de seguridad.”

“Artículo 9.- El Director General podrá negar el ingreso de visitas, defensores o personas de confianza que transgredan la normatividad del Centro Federal o que pongan en riesgo la seguridad.”

32. Por otra parte, el mismo Manual establece las disposiciones que deberán observarse al momento de realizar una revisión de personas que pretendan ingresar a un CEFERESO:

“Artículo 33.- Toda persona que pretenda ingresar al Centro Federal será sujeta por parte del personal de las áreas de seguridad, al procedimiento de revisión personal y material, con el apoyo de los instrumentos electrónicos, equipos periféricos de detección y demás que autorice el Director General.

Artículo 34.- La revisión y registro de las personas que ingresen al Centro Federal, se llevará a cabo a la entrada y salida del mismo. No podrán ingresar personas en los siguientes casos:

I. Cuando porten ropa de colores beige, azul marino y negro;

II. Cuando usen zapatos de plataforma, media plataforma, de punta, botas, botines, tenis o cualquier tipo de calzado con tacón que exceda de 3 centímetros de altura;

III. Cuando usen peluca o cualquier tipo de postizo así como accesorios metálicos y plásticos para el cabello;

IV. Cuando porten objetos o sustancias no autorizados por el Consejo;

V. Cuando hayan consumido estupefacientes, psicotrópicos o bebidas embriagantes, conforme a la valoración médica del Centro Federal;

VI. Cuando porten ropa deportiva, gorras y sombreros;

VII. Cuando pretenda ingresar sin ropa interior o con ropa interior con soportes de plásticos o metálicos, con dos o más prendas de similares características, botones forrados, ropa de doble forro, ropa de doble vista, mallas, medias o shorts o pantalones bajo la falda;

- VIII. *Cuando se resistan a la revisión;*
- IX. *Cuando agredan verbal o físicamente al personal o a cualquier otra persona, y*
- X. *Cuando no porten identificación oficial y de las que se dude su autenticidad.*

Artículo 35.- No se permitirá la introducción al Centro Federal de objetos o sustancias no autorizadas que por su forma, textura, contenido, composición química y física, que a consideración del Director General y el Consejo pongan en riesgo la seguridad del Centro Federal.

Artículo 36.- Los objetos de valor, ropa y otros bienes que el interno posea a su ingreso y que de acuerdo con estas disposiciones no pueda retener, serán entregados a la persona que designe o, en su defecto, resguardados en el depósito de control de objetos, previo inventario que firme el interno.

Aquellos objetos que se encuentren almacenados le serán devueltos al interno al momento de su egreso, previo recibo correspondiente. El Centro Federal no es responsable del deterioro natural de los objetos que estén resguardados.

Artículo 37.- Toda persona que con carácter de autoridad ingrese a los Centros Federales, sólo podrá hacerlo sin portar armas, o alguno de los objetos prohibidos.

Artículo 38.- Toda persona a quien se le haya detectado, mediante el equipo electrónico, la presencia de sustancias prohibidas, debe ser sometido a las pruebas confirmatorias médicas, toxicológicas o las que ordene el Director General.

Artículo 39.- A quien se oponga al cumplimiento de los procedimientos de revisión en su persona o pertenencias, se le impedirá el acceso al Centro Federal y el Titular de Seguridad y Custodia elaborará un reporte circunstanciado al Director General, quien impondrá las medidas que a su juicio procedan, previa opinión del Consejo.”

33. En la XIV Conferencia Nacional de Sistema Nacional Penitenciario, desarrollada los días 28 y 29 de noviembre de 2016, se aprobaron 25 protocolos para que de manera obligatoria sean implementados tanto por las entidades federativas y la federación; entre los que se encuentra el Protocolo relacionados con visitas y entrevistas con organismos públicos de protección de los derechos humanos y personas observadoras.

34. En el apartado relativo a mujeres en centros de detención, cabe precisar lo siguiente:

35. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18, párrafo segundo, dispone que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativo al tema de las mujeres, establece en los artículos 5 (en vigor), 10 (entrará en vigor a más tardar el 30 de noviembre de 2017), 34 y 36 (entrará en vigor a más tardar el 30 de noviembre de 2018), lo siguiente:

“Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario

Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente:

- I. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres;*
- II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas;*
- III. Las instalaciones destinadas a los inimputables se ajustarán a lo dispuesto por el Capítulo IX, Título Quinto, de la presente Ley;*

IV. Las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales.

Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad.”

“Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario

Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:

I. La maternidad y la lactancia;

II. Recibir trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose de la atención médica podrá solicitar que la examine personal médico de sexo femenino, se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado, la atención médica es realizada por personal médico de sexo masculino, deberá estar presente un miembro del personal del Centro Penitenciario de sexo femenino;

III. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género;

IV. Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud;

V. Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley;

VI. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;

VII. Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;

VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;

IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado.

Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño. Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas;

X. Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud específicas, y

XI. Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables.

La Autoridad Penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia, para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños.

Para los efectos de las fracciones I y IV de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los Centros Penitenciarios. La Autoridad Penitenciaria, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, se podrá solicitar a la Autoridad Penitenciaria la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de sus hijas e hijos, estos serán entregados a la institución de asistencia social competente, en un término no mayor a veinticuatro horas, en donde se harán los trámites correspondientes, de acuerdo con la legislación aplicable.

La Autoridad Penitenciaria deberá garantizar que en los Centros Penitenciarios para mujeres haya espacios adecuados para el desarrollo integral de los hijas o hijos de las mujeres privadas de su libertad, o en su defecto, para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre.

En el supuesto en el que las Autoridades determinen el traslado de una mujer embarazada o cuyos hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella, se garantizará en todo momento el interés superior de la niñez.

Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a la organización interna de los Centros.”

“Artículo 34. Atención médica

La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud.

La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran.

Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran.

La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención.

Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución.

Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento.

Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad.

Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud.”

“Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos

Las mujeres privadas de la libertad embarazadas deberán contar con atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, el parto y el puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el personal de salud especializado. En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la condición de salud de la mujer o del producto de la concepción requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas del Sector Salud.

En los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de los Centros Penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil correspondiente.

Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez.

Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:

I. Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad.

Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, la Autoridad Penitenciaria velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez.

Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas.

Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados de la madre privada de la libertad, si esta sigue siendo la única persona que pueda hacerse cargo, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez.

II. A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de

conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.

En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la condición de salud de la mujer o del producto requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas del Sector Salud.

III. A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años de edad.

IV. A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso, el tratamiento que proceda.

Todas las decisiones y actuaciones, así como disposiciones jurídicas adoptadas por las autoridades del Centro Penitenciario, respecto al cuidado y atención de las madres privadas de su libertad y de su hija o hijo con quien convive, deberán velar el cumplimiento de los principios pro persona y el interés superior de la niñez, así como el reconocimiento de niñas y niños como titulares de derechos.

Los Centros habilitarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado de las niñas y niños, a fin de que las mujeres privadas de la libertad puedan participar en actividades de reinserción social apropiadas para las embarazadas, las madres lactantes y las que tienen hijas o hijos.

En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de su hija e hijo y a petición de ella se facilitará la comunicación con el exterior para que se ponga en contacto con la familia de origen y se hará del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas en un término no mayor a veinticuatro horas contado a partir del nacimiento, a efecto de que adopte las medidas especiales, previstas en las disposiciones aplicables.

Las sanciones disciplinarias que se adopten a mujeres embarazadas y de quienes hayan obtenido la autorización de permanencia de su hija o hijo, deberán tener en cuenta en todo momento su condición, así como sus obligaciones como madre. No podrá figurar la prohibición del contacto con sus familiares especialmente con sus hijas o hijos. Sólo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un período limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguridad y el orden.

No podrán aplicarse sanciones de aislamiento a las mujeres embarazadas, a las mujeres en período de lactancia o las que convivan con hijas o hijos.

No se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres que estén en término o durante el parto ni en el período inmediatamente posterior.

El personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional y respetuosa al realizar actos de revisión donde se encuentren niñas y niños.

Las visitas en que participen niñas, niños y adolescentes, se realizarán en un entorno propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento del personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus hijos.

El Centro Penitenciario, en el protocolo correspondiente, establecerá las disposiciones necesarias para garantizar los términos y condiciones bajo las cuales las hijas e hijos que viven con sus madres en el Centro pueden salir del mismo para realizar visitas a otros familiares, actividades de esparcimiento u otra actividad que deba realizarse fuera del mismo.

Lo anterior, no implica la pérdida de la guardia y custodia de la madre privada de la libertad, ni el egreso definitivo del Centro.”

36. En cuanto al apartado relativo a personas migrantes, respecto al comentario de que es “preocupante saber que la detención migratoria es la práctica general y no la excepción en México” en el párrafo 99 del informe, es prudente indicar:

- Que la Ley de Migración, en su artículo 1, establece su objetivo que es regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros en territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacional, mismo que se ejerce a través del Instituto Nacional de Migración, cuya naturaleza jurídica y facultades, se encuentran consignadas en los artículos 19 y 20 de la Ley de Migración;
- En ese sentido, el Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la Secretaría de Gobernación, con atribuciones en materia migratoria para instrumentar la política en materia migratoria; vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; en los casos señalados en la Ley de Migración, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros; imponer las sanciones; llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros; presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones en materia migratoria, respetando en todo momento sus derechos humanos; coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional; proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y las demás que le señalen la normatividad en la materia;
- Además, resulta idóneo precisar que de conformidad con la Ley de Migración, en su Capítulo VII denominado, “Del Procedimiento en la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad”, artículo 112, para eficientar la protección de los menores de edad, al considerarse personas vulnerables, se estableció un procedimiento especial para garantizar sus derechos humanos, ordenándose en su fracción VI, que solo podían ser Retornados a sus países de origen o de residencia, prohibiéndose su deportación, ya que esta última conlleva una medida sancionatoria de restricción de ingreso a nuestro país.

37. En cuanto a la afirmación, del párrafo 100, sobre que “los oficiales de migración comunican a los menores no acompañados que cruzan frontera sobre la poca posibilidad de recibir asilo o las amenazas de permanecer detenidos por un tiempo indeterminado, lo cual hace que muchos acepten voluntariamente la deportación aun con el riesgo que sufren en su país de origen”, es importante precisar:

- Que el miércoles 10 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el PROTOCOLO de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios que tiene por objeto asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes acompañados y no

acompañados, cuando se vean involucrados en procedimientos administrativos migratorios, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

- Este documento también establece la coordinación que debe existir en la atención de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes entre el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría de Protección, el Sistema Nacional DIF y la COMAR, en la atención y determinación del interés superior de la niñez. Asimismo el Protocolo mencionado, refiere el cumplimiento de las medidas de protección integral que determine la Procuraduría de Protección con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los principios rectores de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, por todas las autoridades involucradas. Aunado a lo anterior, las niñas, niños y adolescentes en el caso de que se ubique en los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, tendrán derecho a la regularización de su situación migratoria;
- La Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, no contempla los términos de expulsados, as detenidos y deportación de menores, sino de conformidad con su artículo 3 fracciones XX y XXIV, la PRESENTACIÓN, que es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, RETORNO ASISTIDO es el procedimiento voluntario por el que la autoridad migratoria hace abandonar el territorio nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual; mientras que el artículo 98 del mismo ordenamiento contempla el concepto de detección;
- Si bien es cierto que en el documento se menciona el concepto de ASILO, en términos del artículo 11 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, en nuestro país es recomendable utilizar el término de “Solicitantes de la Condición de Refugiados”, mismo del que es competente para conocer y resolver la Coordinación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de conformidad con los artículo 2, fracción I y 8 de su Reglamento;

38. Por otra parte, en cuanto al señalamiento sobre el “limitado acceso a las estaciones migratorias” es importante mencionar la amplia regulación jurídica nacional sobre el tema:

- El Art. 109 Fracción II de la Ley de Migración señala: “Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto”;
- Asimismo, el Art 224 y 226 del Reglamento de la Ley de Migración establece claramente las personas que tienen acceso a las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales así como los Derechos de los Migrantes Alojados en las mismas. Y en cumplimiento a lo establecido en el Art 108 de la Ley de Migración se emitieron el Jueves 8 de Noviembre de 2012 el ACUERDO por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, instrumento que regula ampliamente el

funcionamiento de las estaciones migratorias así como los Derechos y Obligaciones de las personas Alojadas en los mismos;

- Dentro de los derechos que gozan los migrantes al ser presentados ante la autoridad migratoria, se encuentran los de recibir por escrito sus derechos; a ser informados del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, así como el de designar y remover a un representante legal, de conformidad a lo ordenado por los artículos 109, fracciones II y IV de la Ley de Migración; 226 fracciones II y IV de su Reglamento; 14 fracción VI, 15 y 24 fracción IV del Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de noviembre de 2012;
- Como ya se indicó, anteriormente, de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de noviembre de 2012, los migrantes alojados en Estaciones Migratorias o Estancias Provisionales, sujetos al procedimiento administrativo migratorio podrán designar o revocar a un representante legal o persona de su confianza en cualquier momento, al ser una decisión unipersonal;
- En su Capítulo VI denominado del “Ingreso a las Estaciones Migratorias”, artículo 34, el Acuerdo establece que para acceder a las Estaciones Migratorias o las Estancias Provisionales los integrantes de las asociaciones religiosas y de la sociedad civil, deberán inscribirse en el Directorio de Ingreso Autorizado a Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales, así como cubrir los requisitos de inscripción en éste, por lo que una vez efectuado el trámite, el personal de dichas asociaciones podrá tener acceso a las instalaciones conforme a lo establecido en el citado artículo, máxime que los requisitos solicitados no representan problemática alguna.

39. Finalmente, cabe precisar que con respecto a la recomendación formulada por la CNDH en el caso de cuatro indígenas mexicanos detenidos por el Instituto Nacional de Migración, ésta originó que el Instituto Nacional de Migración elaborara un protocolo de atención para estos casos.